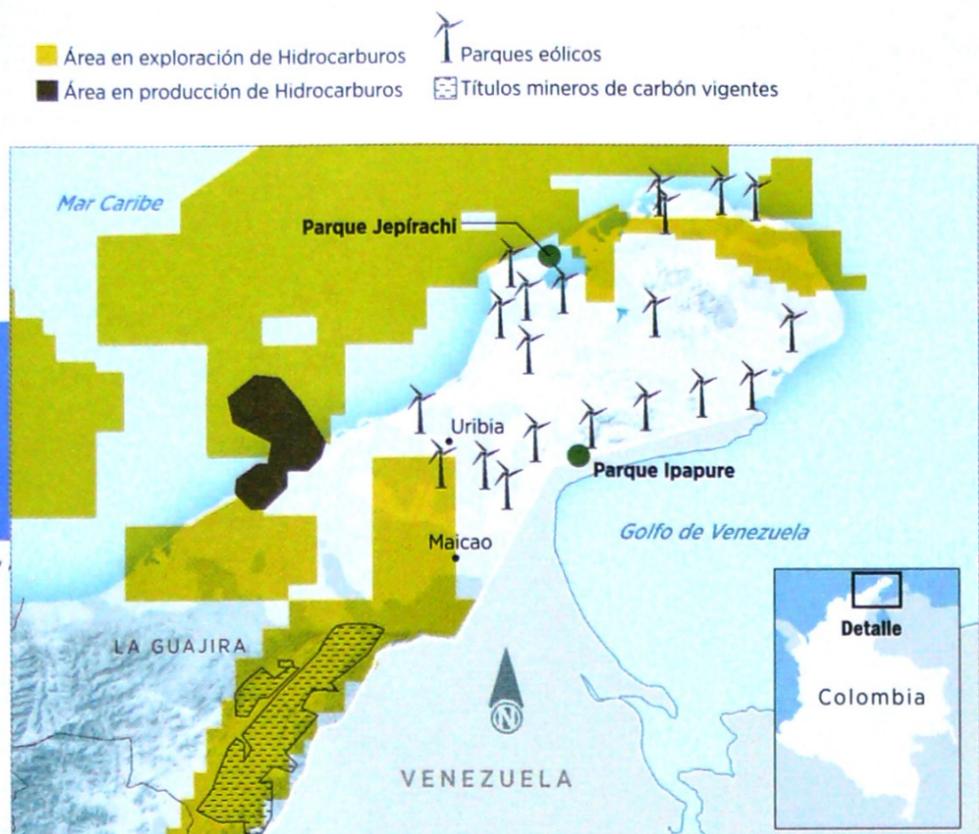


## Mapa de minería, hidrocarburos y energía eléctrica en La Guajira



Fuente: Indepaz

Copenhagen (CBS), quien viajó al departamento para investigar el plan de desarrollo de los proyectos de energía eólica.

Ramírez agregó que la principal preocupación es la falta de un acuerdo de desmantelamiento del parque, es decir, que no hay una hoja de ruta que identifique las posibles repercusiones sociales y ambientales que la salida de Jepirachi podría generar. Anota que “para este tipo de construcciones se realizan excavaciones de aproximadamente 3 metros de profundidad y 20 metros de diámetro, donde utilizan cemento e instalan transmisiones eléctricas”, y de acuerdo con las investigaciones que realizó en los parques eólicos en Oaxaca, México, al desarmar los aerogeneradores “muchas veces dejan los pozos sin cubrir y cuando llueve muchos animales se ahogan. Esto sin mencionar la necesidad de restablecer la vegetación”.

La misma preocupación la planteó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un informe elaborado en 2019, donde documentó que el contrato de Jepirachi es a término indefinido, lo que supone que no hay un acuerdo de salida que garantice los derechos de los resguardos; “las comunidades wayuu han asumido que la duración del convenio es de 24 años, a menos que las partes lo renegocien o lo den por terminado antes”, se lee en el texto. Al respecto, Joanna Barney, investigadora de Indepaz, dijo que la independencia económica de los resguardos es vital “para que no se generen planes asistencialistas entre comunidad y empresa”, y no se presenten estos riesgos ante la culminación de un contrato.

Santiago Villegas, director de planeación y generación de energía de EPM, explicó que la empresa está creando un plan de acción frente a la resolución que formuló la CREG. “Estamos intentando demostrarle a la comisión que la operación de Jepirachi no le genera inconvenientes a la red; esto con el fin de permitirnos operar por un tiempo adicional. De manera simultánea, el grupo está explorando la posibilidad de realizar adecuaciones tecnológicas que permitan cumplir la norma”. Si no se logran alcanzar los estándares establecidos por la CREG, la empresa deberá construir un plan de salida. “Si esto no es posible, nosotros estamos en la obligación de formular un plan de desmantelamiento”, dijo Villegas.

En la reunión de cierre de consulta previa, el Ministerio del Interior declaró que todos los compromisos acordados en 2002 fueron cumplidos y “nada quedó pendiente”. De 2003 a 2019 la compañía realizó inversiones de un poco más de \$2.486 millones de pesos en programas de medidas compensatorias como la construcción de la planta desalinizadora, la ampliación y dotación de la escuela

la Kamüsüchiwo'u, la limpieza y mantenimiento de dos jagüeyes y la dotación de un puesto de salud.

En cuanto a los acuerdos pactados en 2017, EPM se comprometió a impulsar la capacitación, financiación y desarrollo de cuatro proyectos productivos para la comunidad kasiwolluin: avicultura, agricultura, capricultura y artesanías. Al igual que iniciativas de pesca, turismo y saneamiento básico. La empresa aportaría fondos por un mínimo de 200 millones de pesos anuales por los siguientes cuatro años, donde la Fundación Ecosfera entraría a gestionar la primera parte de esta iniciativa.

Andrés Puentes, director de Ecosfera, dijo que se adelantaron las capacitaciones: “Intentamos capacitar a los pescadores en el uso de GPS, al igual que en el mantenimiento de redes de pesca, embarcaciones y en el proceso de cadena de frío para mejorar la calidad del producto. Sin embargo, un proyecto productivo no es sostenible en el corto plazo, y además, se han presentado inconvenientes porque la comunidad no asistió de forma rigurosa a los talleres”.

Sobre la preocupación por el suministro de agua, Santiago Villegas dijo que han insistido en impulsar la creación de una empresa que administre la planta desalinizadora, aunque los conflictos internos no han permitido que la iniciativa sea posible. “También hemos solicitado al municipio que cumpla con su obligación de operar y mantener la planta. Estamos revisando si es posible implementar el proyecto Guajira Azul impulsado por el Gobierno nacional para garantizar el agua en la zona”.

miembros del resguardo insisten en que el manejo por parte del municipio no asegura que el agua llegue a todos los hogares. “No es lo mismo porque el Gobierno nunca nos han tenido en cuenta, y el riesgo de una suspensión del funcionamiento es muy alto”, dijo Laura Uriana.

Pero más allá de los acuerdos incumplidos, o los que están en veremos, la preocupación de fondo sigue siendo la autonomía económica de los resguardos indígenas que siguen dependiendo de los grandes iniciativas que se desarrollan en sus territorios, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos de minería, exploración y producción de hidrocarburos, impactan directamente al pueblo wayuu.

Entre las comunidades la pregunta es si se pueden construir modelos de negocios autosostenibles con el pueblo wayuu y si se está a tiempo para garantizar que la transformación energética de La Guajira parta de criterios claros que reconozcan los derechos territoriales, culturales y de pervivencia de los pueblos y logre que las comunidades tengan todos los vientos a favor. ■



REVISTA

# Vea

ADQUIÉRELA A PARTIR  
DEL 20 DE MARZO

EN VERSIÓN IMPRESA  
EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA

o DIGITAL  
A TRAVÉS  
DE NUESTRA



SUSCRÍBETE: LLAMA YA EN BOGOTÁ AL 4055600  
LÍNEA NACIONAL GRATUITA 01 8000 510903